

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, así como ejercer la acción que corresponda al momento procedimental en que se encuentre el expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la citada Ley 30/1992, y del artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Madrid, 18 de julio de 2002.—El Director general, José Luis López-Sors González.—35.156.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto «mejora local, conexión CN-322 con CN-430, punto kilométrico 353,95 (CN-322), tramo Albacete, provincia de Albacete», clave del proyecto 39-AB-4020, término municipal de albacete, provincia de Albacete.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha de 8 de mayo de 2002 se aprueba el proyecto de construcción arriba indicado y se ordena a esta Demarcación la incoación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto aprobado.

Es de aplicación el artículo 77.1 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), que modifica la Ley 25/88, de 29 de junio, de carreteras en sus artículos 8.1 y 2 a cuyo tenor se declara de urgencia la ocupación de los bienes por la expropiación forzosa a que de lugar la aprobación de los proyectos de carreteras estatales. La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa (en adelante LEF), de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en la relación que se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete», y que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albacete, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha y en la Unidad de Carreteras del Estado en Albacete para que asistan al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

Lugar: Ayuntamiento de Albacete.

Día: 26 de septiembre de 2002 a partir de las once horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en los periódicos «La Tribuna» y «La Verdad», de Albacete, y en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian personal-

mente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar a su costa de peritos y notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, a los efectos de información pública contemplados en los artículos 17.2, 18, 19.2 de la LEF para que en el plazo de quince días (que, conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, podrán prorrogarse hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación), los interesados podrán formular por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras sita en la plaza de Santa Clara, 7, 45071 Toledo, o en la Unidad de Carreteras de Albacete sita en la calle Alcalde Conangla, 4, entresuelo, 02071 Albacete, alegaciones a los sólo efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias antes citadas.

Toledo, 8 de julio de 2002.—Teodoro Abad Ortiz.—35.306.

Notificación de la Subdirección General de Recursos de la resolución recaída en el recurso administrativo número 2148/00.

Al no haberse podido practicar la notificación personal al interesado conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, debe publicarse, a efectos de notificación, la resolución del recurso de fecha 19 de abril de 2002, adoptada por la Subsecretaría del Departamento, en el expediente número 2148/00:

«Examinado el recurso de alzada interpuesto por la empresa «Autocares Jiménez Bus Travel, Sociedad Limitada», y en su nombre don Manuel Jiménez Bonilla, para impugnar la resolución del Director General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera (hoy Dirección General de Transportes por Carretera), de fecha 5 de abril de 2000, que le sancionaba con multa de 15.000 pesetas (90,15 euros), por exceso en los tiempos máximos de conducción autorizados, incurriendo en la infracción tipificada en el artículo 142.k) de la Ley 16/1978, de 30 de julio (Exp. IC 224/2000).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Inspección del Transporte Terrestre dependiente de este Ministerio, se levantó acta de infracción al ahora recurrente, en la que se hicieron constar los citados datos que figuran en la indicada resolución.

Segundo.—Dicha acta dio lugar a la tramitación del preceptivo expediente, y, como consecuencia del mismo, se dictó la resolución ahora recurrida.

Tercero.—Contra la expresada resolución, el representante de la mercantil, mediante escrito de fecha 19 de mayo de 2000 (Registro), interpone recurso de alzada en el que alega lo que estima más conveniente y solicita la revocación del acto impugnado. Recurso que el órgano sancionador informa desfavorablemente.

Fundamentos de Derecho

1. Los hechos sancionados se encuentran acreditados a través de los documentos aportados por el propio interesado, los discos-diagrama, de los días, vehículo y conductor allí expresados. La interpretación de los mismos se encuentra bajo la garantía de los servicios técnicos de este Departamento, a los cuales se presta conformidad.

Así pues, carecen de alcance exculpatório los argumentos del recurrente, por cuanto la Ley 16/1987

de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre, tipifica como infracción leve en el artículo 142.k), los citados hechos, y no pueden prevalecer sobre la norma jurídica tales argumentos, por lo que el acto administrativo impugnado se encuentra ajustado a Derecho, al aplicar correctamente la referida Ley y su Reglamento, en relación con el Reglamento 3820/1985, de 20 de diciembre, de la Comunidad Económica Europea.

2. En cuanto a la alegación de vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones, no puede ser aceptada la misma por falta de fundamento jurídico ya que, calificados los hechos imputados como infracción leve a tenor de lo establecido en el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y siendo sancionable la misma, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 201.1 del citado Reglamento con apercibimiento y/o multa de hasta 46.000 pesetas, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso y el principio invocado el Órgano sancionador graduó la sanción limitándola a una multa de 15.000 pesetas (90,15 euros). Respecto a la acumulación de expedientes solicitada, se significa que no procede acceder a la misma, al tratarse de infracciones individualizadas cometidas en diferentes días por vehículos de la titularidad del recurrente.

En su virtud, Esta Subsecretaría, de conformidad con la propuesta formulada por la Subdirección General de Recursos ha resuelto:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la representación de la empresa «Autocares Jiménez Bus Travel, Sociedad Limitada», contra resolución de la suprimida Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, de fecha 5 de abril de 2000 (Exp. IC 224/00), la cual se declara subsistente y definitiva en vía administrativa.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su notificación.

La referida sanción deberá hacerse efectiva dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, transcurrido el cual sin haber satisfecho la sanción impuesta en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, según lo establecido en los artículos 146.4 de la LOTT y 215 de su Reglamento de aplicación, incrementada con el cargo de apremio y en su caso, los correspondientes intereses de demora.

El pago de la multa impuesta se realizará mediante ingreso o transferencia en la cuenta corriente de BBVA 0182-9002-42, número 0200000470, paseo de la Castellana, 67 (Madrid), haciendo constar expresamente el número de expediente sancionador.»

Madrid, 12 de julio de 2002.—Antonio Carretero Fernández.—35.324.

Notificación de la Subdirección General de Recursos de la resolución recaída en el recurso administrativo número 187/99.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a la interesada, conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, debe publicarse, a efectos de notificación, la resolución del recurso de fecha 14 de marzo de 2002, adoptada por la Subsecretaría del Departamento en el expediente número 187/99:

Examinado el recurso extraordinario de revisión formulado por don Rafael Anguita Cervera, en representación de «Transportes Miguel Delgado, S. A.», contra resolución de la Secretaría de Estado

de Infraestructuras y Transportes de 25 de septiembre de 1998, por la que se desestimó el recurso ordinario interpuesto contra resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y transportes por Carretera de fecha 12 de mayo de 1997, que le sancionaba con multa de 20.000 pesetas (120,20 euros) por falta leve del artículo 142.k de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera de 12 de mayo de 1997 se impuso a «Transportes Miguel Delgado, S. A.», una sanción por infracción leve de 20.000 pesetas por superar los tiempos máximos de conducción autorizados.

Contra dicha resolución interpuso recurso ordinario que fue desestimado mediante Resolución de 25 de septiembre de 1998 por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes.

Segundo.—El 18 de mayo de 1999 la interesada interpone recurso de revisión, que basa en el número 1 del artículo 118 de la Ley 30/1992, contra la resolución de 25 de septiembre de 1998, al considerar que se había omitido el procedimiento legalmente establecido, la resolución impugnada carecía de motivación y la sanción no era proporcional a la infracción cometida.

Tercero.—El Servicio Instructor formuló propuesta de resolución en el sentido de desestimar el recurso.

Cuarto.—La Abogacía del Estado informó favorablemente la propuesta de resolución.

Y, en tal estado de tramitación se dispuso su remisión al Consejo de Estado para consulta, el cual lo emite con fecha 15 de noviembre de 2001.

Fundamentos de Derecho

Primero.—En cuanto al fondo de la cuestión suscitada en el expediente procede su desestimación en base a lo informado por el Consejo de Estado, el cual se manifiesta al siguiente tenor:

«El recurso de revisión sólo cabe interponerlo contra los actos que agoten la vía administrativa cuando concurren alguna de las circunstancias enumeradas taxativamente en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso sometido a consulta, las causas invocadas no son incardinables en ninguna de las enumeradas en el citado precepto, de tal suerte que procede desestimarlos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar el recurso de revisión sometido a consulta.»

Segundo.—Se ha de precisar que la resolución que se adopte es competencia de la Subsecretaría del Departamento en orden a lo previsto en el RD 1475/2000 de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura Orgánica del Ministerio de Fomento.

En su virtud esta Subsecretaría, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, ha resuelto desestimar el recurso extraordinario de revisión formulado por la representación de «Transportes Miguel Delgado, S. A.», relativo a infracción de la legislación de los transportes terrestres.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su notificación.

Madrid, 18 de julio de 2002.—Antonio Carretero Fernández.—35.567.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación y Alta Inspección de la resolución de solicitud de revocación.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a don Andrés Cávadas Oruzco, con NIF 53697580D, conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 a efectos de notificación al interesado, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo y en el segundo párrafo del artículo 60.2 de la Ley 30/1992, debe publicarse como encabezamiento y parte dispositiva de las resoluciones el siguiente extracto:

«El Director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección ha resuelto la desestimación de la solicitud de revocación interpuesta por don Andrés Cávadas Oruzco, con NIF 53697580D, correspondiente a la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso académico 1997/1998». El expediente se encuentra a disposición de la interesada en la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa (Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control, teléfono 91 377 83 00, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid).

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe intrponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 18 de julio de 2002.—Amalia I. Gómez Rodríguez.—35.406.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio de depósito de la modificación de los Estatutos pertenecientes a «Veter-Industria Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal» (depósito número 373).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de los estatutos de la citada Asociación profesional, al haberse observado el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical («Boletín Oficial del Estado» del 4).

La modificación ha sido solicitada por don Santiago de Andrés Juárez mediante escrito de fecha 26 de junio de 2002 y se ha tramitado con el número 50/5789-7189-36/10090.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación de los artículos 1, 3, 9, 9 bis, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28 y 31 de los estatutos de la asociación fue adoptado por unanimidad en la reunión de la asamblea general celebrada el día 30 de mayo de 2002. A la misma fueron convocados la totalidad de sus miembros en número de 59, asistiendo 31 de los mismos.

Se procede a modificar la denominación de la asociación, que deja de llamarse «Asociación Empre-

sarial de la Industria Zoosanitaria» para pasar a denominarse «Veter-Industria Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal».

La certificación del acta está suscrita por don Santiago de Andrés Juárez, en calidad de Director general con el visto bueno del presidente, don Fernando Franco González.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y su exposición en el tablón de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Se pone en su conocimiento que cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este centro directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6 despacho 210, Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Madrid, 3 de julio de 2002.—La Subdirectora general, María Antonia Diego Revuelta.—35.481.

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio de depósito de la modificación de los Estatutos correspondiente a «Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)» (depósito número 5.155).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de los estatutos de la citada Asociación profesional, una vez presentada la documentación requerida por esta Dirección General, al haberse observado el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical («Boletín Oficial del Estado» del 4).

La modificación ha sido solicitada por don Álvaro Mazarrasa Alvear mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2002 y se ha tramitado con el número 49742-4998-49706.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación del artículo 6.º fue adoptado por unanimidad en la reunión de la Asamblea general extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2000. Con posterioridad, el día 20 de septiembre de 2001, también por unanimidad de la Asamblea general extraordinaria, se acordó modificar el artículo 17.º de los Estatutos.

La certificación de los Acuerdos está suscrita por don Álvaro Mazarrasa Alvear, en calidad de Director general y Secretario de la Asamblea general de dicha asociación con el visto bueno del Presidente, don Jorge Segrelles García.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y su exposición en el tablón de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Se pone en su conocimiento que cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6, despacho 210, Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Madrid, 3 de julio de 2002.—La Subdirectora general, María Antonia Diego Revuelta.—35.482.

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio de depósito de la modificación de los Estatutos correspondiente a la «Asociación Española de Concesionarios Volvo» (ANCOVO) (depósito número 4.321).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de los estatutos de dicha asociación, presentado el 14 de mayo de 2002, tramitado con el número